

La violencia pandilleril y su afectación a los derechos humanos

Arnau Baulenas Badia

Coordinador del Área Jurídica del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHU-CA). Ponencia presentada en la Universidad de Notre Dame

Palabras clave:
pandillas, violencia,
derechos humanos.

Introducción

Desde la perspectiva del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), una de las problemáticas que ha existido, existe, y que tememos que seguirá ocurriendo, es *la afectación de los derechos humanos frente a la violencia de la pandilla*. Si bien la temática es muy amplia y podría abarcarse desde distintos puntos, hemos considerado pertinente dividir la presentación en dos aspectos.

1. La pandilla como victimario causante de desplazamiento forzado y confinamiento

Cuando hablamos de la violencia y el actuar de las estructuras de crimen organizado conocidas como maras o pandillas, inevitablemente debemos hablar de violación a los derechos humanos. Desde hace muchos años, el actuar de las pandillas ha destruido a familias, ha causado un profundo dolor y ha provocado que centenares de familias de forma semanal se vean obligadas a dejar sus casas y reubicarse en otra parte del territorio —en el mejor de los casos— y, de no ser posible, salir del país o vivir confinadas.

Las Naciones Unidas definen el desplazamiento forzado como la situación de “personas o grupos de personas obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto armado, situaciones

de violencia generalizada, violación de los derechos humanos”.

En El Salvador, algunos datos demuestran la magnitud de tal situación:

a) El *Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno* (GRID 2018) coloca a El Salvador como el décimo país con mayor número de desplazados internos “asociados a conflictos y desastres”. El GRID 2018 divide el desplazamiento según sea por conflictos internos o por desastres, y la lista en la que aparece El Salvador se refiere exclusivamente a conflictos internos. El *Informe* calcula que en 2017 El Salvador llegó a la cantidad de 296,000 desplazados internos, como resultado de la violencia. Los nueve países que superaban a El Salvador en número de desplazados tenían guerras civiles o movimientos de guerrilla interna. El Salvador es el único país de América Latina que aparece en la lista de las diez naciones con mayor número de desplazados internos, siendo los otros nueve pertenecientes a Asia (cuatro) y a África (cinco).

b) En el IDHUCA hemos atendido a un número significativo de desplazados forzados que nos ayuda a comprender el fenómeno hasta hace poco negado oficialmente. Sin pretender un análisis exhaustivo del problema, creemos que la sistematización del trabajo realizado por el IDHUCA ayuda a entender mejor la situación de muchas personas en El Salvador y la falta de respuesta del Estado. En el año 2018, el IDHUCA recibió un total de 377 casos, dentro de los cuales se encuentran alrededor de 938 personas. Todos los casos implican violaciones a los derechos humanos y, por supuesto, las personas incluidas en ellos han sufrido los efectos de atentados contra sus derechos. Casi dos terceras partes, 240 casos (64 %), estuvieron vinculados a protección humanitaria por desplazamiento forzado. El

número de personas afectadas fue de 667, un 71 % del total de las personas atendidas en el IDHUCA con seguimiento de sus casos. La mayor relación de personas por caso se debe a que, en la mayoría de los casos de desplazamiento, las afectadas son familias.

Del total de casos donde hay personas en situación de desplazamiento forzado, 42 % de ellas fueron afectadas por la pandilla MS-13 y 30 % por la pandilla 18. En cifras muy inferiores, también se han identificado casos en los que miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador, agentes estatales, han sido los principales causantes de hostigamiento y persecución de los grupos familiares y, por tanto, los que han provocado el desplazamiento forzado de un total de 16 personas. Es importante mencionar que el agente que provoca el desplazamiento a cada una de las víctimas no es exclusivamente uno, sino que con frecuencia existen múltiples agentes persecutores.

Ante esta situación, es innegable el impacto que genera sobre los derechos humanos de la sociedad salvadoreña. Ahora bien, cuando hacemos referencia a los derechos humanos, de forma prácticamente automática pensamos en el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal. Sin embargo, es preciso tener en mente que no solo son estos los derechos afectados, sino que, ante una situación de confinamiento o desplazamiento forzado, hay una afectación más amplia de los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales de derecho internacional de los derechos humanos.

Y en este punto, es de suma importancia recordar alguna de las características de los derechos humanos. Una de ellas es la indivisibilidad y la interdependencia.

Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Estas características se derivan de una concepción integral de los derechos, en los que no opera ninguna forma de jerarquía ni sus violaciones o consecuencias pueden tratarse aisladamente de otras en las que no se haya actuado en forma directa. Si la integridad se rompe, se afecta a la persona como un todo y no solo a una parte de ella. La indivisibilidad significa que todos los derechos humanos están unidos por un mismo cuerpo de principios y que todos están situados a un mismo nivel. No hay derechos humanos más importantes que otros. A su vez, la interdependencia significa que todos los derechos humanos están interrelacionados. No puede afectarse un derecho sin afectar otros.

Dicho lo anterior, y con el fin de poder concluir este primer apartado, del estudio de los casos que hemos podido recibir nos permite afirmar que no solo los derechos contemplados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se ven vulnerados, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, sino también los derechos contemplados en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales: el derecho a la educación —lo primero que hacen las familias es dejar de llevar sus hijos e hijas a la escuela—; el derecho al trabajo —por tener que huir, son despedidos de sus trabajos—; el derecho a la salud —muchas veces, por el propio control territorial de las estructuras criminales, no pueden acudir a los centros asistenciales; pero no solo eso, sino que tampoco existen programas de salud mental para ayudar a las víctimas de violencia—.

Finalmente, me gustaría compartir un mensaje en relación con las personas que se ven obligadas a dejar El Salvador por ser desplazados forzados. Nadie abandona

su país de forma voluntaria, sabiendo que probablemente nunca podrá regresar, para aprovecharse de las condiciones de vida que puede haber en otro país. Ver a las víctimas de desplazamiento forzado como unas aprovechadas, o como unos criminales —como algún presidente de algún país ha manifestado— demuestra una gran ignorancia. Y la situación de los desplazados forzados es una cuestión de responsabilidad y de compromiso social, tanto de los países origen como de aquellos países donde la gente busca una protección internacional. Si países como El Salvador siguen negando la problemática y otros países se siguen negado a recibir y dar protección a las víctimas de desplazamiento, la muerte, las desapariciones y las violaciones a los derechos humanos seguirán siendo una tragedia.

2. La guerra del Estado contra la pandilla: estado de impunidad donde, al parecer, el fin justifica los medios

A continuación, voy a tratar el segundo aspecto que quería compartir con ustedes y este es que la afectación de los derechos humanos por parte de las pandillas ha provocado que, en los últimos cinco años, el Gobierno de El Salvador haya declarado una guerra abierta contra estas estructuras. Y, por tanto, y como más adelante detallaré, el Estado se ha convertido en victimario, y el Estado, a través de la PNC, ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, como son ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, bajo la máxima de que el fin justifica los medios y de que, ante ciertas situaciones y ciertos grupos, los derechos humanos no deben respetarse.

Dicha afirmación viene avalada por la *Declaración Final de la Relatora de Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas*, Agnes Calamard, quien visitó El

Salvador en enero de 2018. En dicha *Declaración*, decía textualmente: “He encontrado un patrón de comportamiento en el personal de seguridad, que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, el cual es alimentado por respuestas institucionales débiles, a nivel de investigación y judicial”.

En esta línea, y para entender las políticas de seguridad pública que se han seguido en El Salvador desde el año 2003, les recomiendo que puedan leer el reciente estudio realizado por Jeannette Aguilar bajo el título *Las políticas de seguridad pública en El Salvador 2003-2018*. Ahora bien, si nos centramos en los últimos cinco años, al término de guerra contra las pandillas, se ha implementado una fuerte represión y apoyo absoluto al actuar de la PNC, con independencia de si el mismo era apegado a derecho.

Dicen que una imagen vale que más que mil palabras, pero a veces un dato también. La PNC, desde el 2013 hasta junio de 2018, ha matado aproximadamente a 2,000 personas civiles (algunos de ellos pertenecientes a maras o pandillas, otras personas sin ninguna vinculación con estas estructuras). Estas muertes se han dando, en lo que se ha denominado enfrentamientos o agresiones ilegítimas entre la PNC y personas civiles, es decir, en supuestos operativos policiales oficiales, donde la policía ha sido atacada por parte de supuestos criminales. Sin embargo, las cifras demuestran que la gran mayoría han sido ajusticiamientos y no enfrentamientos reales. Asimismo, en esta cifra de aproximadamente 2,000 personas, no debemos incluir a las que han matado los grupos de exterminio.

Según los datos obtenidos a través de la propia PNC, en el 2013, hubo 142 enfrentamientos; en el 2014, un total de 256; en el 2015, un total de 494; en el 2016, un total

de 659; en el 2017, un total de 528, y hasta junio de 2018, un total de 207.

Al analizar el resultado de estos supuestos enfrentamientos, la cifra es todavía más alarmante si analizamos el índice de letalidad. En este sentido, una forma de medir el uso de fuerza letal por fuerzas de seguridad consiste en establecer la relación entre el número de muertos y heridos de presuntos criminales en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Una forma de hacerlo, atribuida a Paul Chevigny, divide el número de muertos entre el número de heridos para generar un cociente que identifique cuántos muertos por cada herido producen estos enfrentamientos.

Los datos son contundentes: en el 2015 fue de 3.1; en el 2016, de 5.1, y en el 2017, de 6.3. Asimismo, si analizamos la relación entre muertes de policías y civiles, los números son altamente preocupantes. En 2015, era de 35; en el 2016, de 101.5; en el 2017, de 136, y hasta junio 2018, de 125.

En todos estos casos, la gran mayoría de las investigaciones se archivó en sede fiscal, y en aquellos casos donde se presentó el requerimiento fiscal, este terminó con un sobreseimiento definitivo solicitado por la propia Fiscalía. Nótese que, a pesar de que aproximadamente 2,000 personas han muerto a manos de la PNC, en la actualidad solo ha habido tres condenas por ejecución extrajudicial en todo el país.

Uno de los casos paradigmáticos de impunidad ha sido el de la masacre de San Blas, de las primeras que se reportaron por parte del periodismo, en este caso *El Faro*, donde fueron absueltos todos los policías acusados de ejecutar a siete personas. Este incluso ha suscitado el interés y el seguimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Otro de los aspectos notorios en el marco de la guerra contra las pandillas han sido las grandes redadas. En los últimos tres años, cada mañana nos levantábamos con la noticia de cientos de personas capturadas. A la gran mayoría se les imputaba el delito de organizaciones terroristas —esta calificación jurídica se les imputa a las personas que supuestamente forman parte de la mara o que colaboran de alguna forma con ella—. La traducción de estas grandes redadas ha sido una vulneración constante por parte del Estado de un sinnúmero de personas inocentes, la mayoría jóvenes. Ha sido una tendencia el realizar estas grandes redadas por parte de la PNC y la Fiscalía con un único objetivo: aparentar que, efectivamente, se estaban combatiendo las estructuras del crimen organizado.

Lamentablemente, el resultado ha sido la criminalización de la pobreza y la estigmatización de muchos jóvenes cuyo único delito es no tener la capacidad económica ni los recursos para vivir en otra comunidad que no esté controlada por las maras. Asimismo, esto se ha hecho utilizando una figura muy controvertida, como es la del testigo criteriado, es decir, un criminal que desea colaborar con el Estado. Si bien la figura es legal, la poca transparencia en los acuerdos entre la Fiscalía y este criminal supuestamente arrepentido, así como los grandes beneficios por involucrar el máximo número de personas, ha provocado un gran número de procesos penales arbitrarios, donde se han vulnerado derechos básicos de las personas.

Si a lo anterior le sumamos las leyes que desde 2015-2016 se han aprobado, dedicadas de forma especial a las pandillas, la traducción es que estamos en un Estado represor que avala las vulneraciones de los derechos humanos si supuestamente eres señalado de formar parte de la estructura y que permite la absoluta impunidad de los agentes del Estado

que, en aras a defender la seguridad pública, cruzan líneas rojas que atentan contra los derechos humanos.

En relación con las leyes aprobadas, de forma especial, hay que recordar las medidas extraordinarias que se aprobaron en abril 2016 y que estuvieron vigentes hasta septiembre de 2018. Estas crearon:

1. Tres fuerzas especiales de seguridad combinadas, compuestas por policías y militares.
2. Trece nuevos tipos penales, además de modificar con aumento de penas otros once delitos y facultar a la Fiscalía General de la República para girar órdenes de captura contra menores de edad sin autorización judicial, entre otros cambios.
3. Y en los centros penales:
 - Traslados forzados.
 - Suspensión de visitas familiares
 - Suspensión del traslado para las audiencias judiciales, imposibilitando a los imputados estar presentes en cualquier diligencia judicial; salvo en el juicio, donde pueden estar de forma virtual. Esto ha ocasionado demoras en el proceso: el juicio puede celebrarse hasta dos años posteriores a la celebración de la audiencia inicial.
 - Limitación de la entrada de los abogados en los penales.
 - Impedimento a las personas en reclusión para salir de sus celdas, salvo una hora tres veces por semana, con independencia de si han sido condenadas o están en detención provisional. Si las personas están acusadas o condenadas por su pertenencia a

- estructuras pandilleriles, no existe posibilidad de salir de la celda.
- Suspensión del servicio de tienda institucional. Ello ha agravado las condiciones de salubridad de los centros, pues los internos no tienen acceso a artículos mínimos de higiene.
 - Bloqueo de todas las señales de telecomunicación.

Todo ello provocó, entre otras consecuencias, que:

- Los casos de tuberculosis aumentaron en un 440 %, según los datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Antes de las medidas, había 96 casos; a partir de la implementación de las medidas, se sumaron 422 casos, haciendo un total de 518 en 2016.
- En el 2016, murieron 47 personas privadas de la libertad; la mayoría de ellas no habían recibido aún una sentencia condenatoria. Siete personas más murieron en el mes de agosto del presente año en una bartolina de una delegación policial del país.
- Desde la implantación de las medidas, la PDDH ha recibido un total de 2,035 quejas. Las tres más recurrentes son: 1) falta de asistencia médica (33 %), 2) condiciones de habitabilidad (22.5 %) y 3) traslados forzados (14.6 %).
- El ministro de Justicia y Seguridad Pública hizo una campaña mediática para presentar a la población las celdas de aislamiento para aquellos sujetos que hayan participado en actos atentatorios contra cuerpos

de seguridad. Estas son de 2.5 de ancho por 4 metros de largo, sin luz ni ventilación. Es muy probable que estas celdas estén siendo utilizadas para recluir a personas en detención provisional.

- Otro elemento relevante es que las autoridades prohibieron el acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja a todas las cárceles del país.

Finalmente, y para terminar mi intervención, me gustaría compartir que el dilema “derechos humanos y seguridad” debería estar superado. En el momento en que el Estado actúa igual que lo hacen las estructuras de crimen organizado, estas han ganado su batalla. El estricto respeto a los derechos humanos no es un impedimento para combatir la delincuencia. El Estado tiene las herramientas y los recursos necesarios para poder llevar ante la justicia a los criminales. Ahora bien, en el momento en el que decide tomarse la justicia por su mano; que hay personas que no tienen derecho a que se les respeten sus derechos humanos; que con el trato cruel, inhumano o degradante, pondremos fin a la criminalidad organizada; como país, nos seguiremos desangrando. Y la espiral de violencia que acaba beneficiando a unos pocos no tendrá fin. Los derechos humanos no entienden de razas ni de culturas. No hacen discriminación alguna. El Estado no puede ni debe admitir que, bajo la premisa del daño que causa la pandilla, todo se vale, porque lo que ocurre es que luego el Estado actúa como un criminal, y luego perdemos lo que la Constitución señala: que somos un Estado social, democrático y de derecho.

Marzo de 2019.